

## De la explosión societaria a la destrucción del asociacionismo obrero y campesino. Ourense (1934-1939)

Julio Prada Rodríguez

### Introducción

El discurso anticaciquil y la retórica regeneracionista de la primera dictadura encontraron en el movimiento agrarista gallego un firme aliado; entonces, no pocos agrarios tomaron al asalto el poder local en numerosas corporaciones donde la acción quirúrgica de los delegados gubernativos desplazaba a las élites del "turno", y, asimismo, no fueron pocos los dirigentes llamados a altas responsabilidades administrativas por el Directorio. Paralelamente, el abolicionismo a ultranza de las sociedades agrarias más radicales fue modulándose hasta desembocar en la aceptación explícita de la fórmula redencionista como mecanismo de solución de la problemática foral. El decreto de 1926 certificó este giro estratégico, pero también la definitiva desactivación de la protesta que inflamara el agro gallego durante dos décadas y la intensificación de los aspectos más técnicos y económicos del movimiento.

Los agrarios, siempre tan proclives a llamar a la unidad como incapaces de consolidarla en la práctica, hallaron entonces un nuevo e irreparable motivo de división. Los sectores más próximos a posiciones republicanas y no pocos socialistas denuncian la actitud claudicante de algunos líderes de la poderosa Confederación Regional de Agricultores Gallegos (CRAG); acusaciones que se confirman cuando los partidarios de la institucionalización del régimen les ofrecen el cebo envenenado de la Unión Patriótica. Numerosas sociedades dejan de asistir a sus Congresos, las Federaciones Provinciales ni siquiera los celebran y su compromiso militante con la lucha agraria languidece a la par que el régimen.

Los socialistas parecen haber sido los primeros en apercibirse de las posibilidades que esta mezcla de entreguismo y ausencia de norte de la CRAG ofrecían para sus intereses; a lo que habría que sumar el absoluto declive del sindicalismo católico y el retroceso de la CNT como consecuencia de la persecución gubernamental. Lógicamente ello ha de ponerse en relación con el creciente interés de los herederos de Pablo Iglesias por la cuestión agraria y con el afianzamiento de las tesis reformistas respecto al pequeño campesinado. El Congreso de Lugo (marzo, 1926) -en el que sólo está presente una agraria ourensana a pesar de la destacable influencia del PSOE en las sociedades del *Hinterland* de la capital provincial- constituye el mejor exponente de ese intento de llenar el vacío existente. Dejando de lado las cuestiones más puramente técnicas y económicas, el Congreso aprobó los estatutos de la Federación de Sociedades de Trabajadores de la Tierra de la Región Galaica; pero lo mismo la inscripción legal de su reglamento que la campaña de propaganda posterior encontrarían no pocos obstáculos en las autoridades, lo que vendría a certificar la precoz ruptura en el Noroeste hispánico del "pacto de no

agresión” entre el régimen y el PSOE<sup>1</sup>.

La situación del otrora pujante agrarismo era, pues, cualquier cosa menos optimista en vísperas del abandono del poder por parte del general Miguel Primo de Rivera. Pero ya entonces aparecen configurados dos elementos que definirán a buena parte del movimiento en los años venideros: la común lucha contra la Monarquía y la cada vez más acusada tendencia de muchas sociedades a establecer vínculos con fuerzas políticas que intentan asaltar el poder.

### **Los progresos del asociacionismo obrero y campesino en el Ourense republicano**

Los resultados electorales del 12 de abril continúan siendo objeto de discusión por lo que a Galicia se refiere<sup>2</sup>. No es posible ponerse de acuerdo ni siquiera en el número total de concejales, mucho menos en su reparto entre las diferentes fuerzas y candidaturas ni en la determinación de la multiforme realidad que escondían las etiquetas de “agrarios” -donde convivían desde conservadores a socialistas e, incluso, comunistas-, “independientes”, “desconocidos” o “sin definir”, éstos últimos especialmente numerosos en la provincia de Ourense, creemos que sin duda en relación con el peso de las clientelas fieles a Calvo Sotelo. En todo caso, no cabe pensar en un panorama substancialmente diferente en este Occidente hispánico del resto del Estado, por lo que monárquicos y conservadores habrían obtenido mayoría en el conjunto del territorio, incluidas algunas villas importantes, mientras en las principales ciudades las candidaturas republicanas y de izquierda se habrían impuesto claramente, a excepción de Lugo, donde la victoria fue para aquéllos, y Ourense, donde se registró un práctico empate.

Las villas con fuerte presencia de elementos republicanos y obreros no aguardaron siquiera al cumplimiento del plazo legal previsto para el cambio de corporaciones. En la Galicia rural, ante la ausencia de grandes movilizaciones populares, hubo que esperar a que otras instancias tomaran la iniciativa. En vísperas de la convocatoria electoral se habían improvisado en no pocos ayuntamientos reducidos comités republicanos, algunos con fuerte presencia de elementos relacionados con anteriores experiencias societarias donde se reforzaban comunes vínculos e intereses y desarrollaban diversas fórmulas de sociabilidad<sup>3</sup>; ahora, consumada la victoria, el nuevo régimen va a encontrar en ellos sus primeros apoyos en el ámbito local. En estos casos la fórmula más repetida fue presentar protestas y reclamaciones o argumentar que la presión caciquil impedía la celebración de los comicios por aplicación del famoso artículo 29; inmediatamente un delegado gubernativo se encargaba de destituir a la gestora monárquica en funciones y nombrar una nueva con amplia presencia de representantes de dicho comité, encargados de preparar las nuevas elecciones en las que, casi invariablemente, obtendrían la victoria. Frecuentemente, allí donde no existían «republicanos

<sup>1</sup> Véase CABO VILLAVARDE, Miguel, *O agrarismo*, Vigo, A Nosa Terra, 1998, pp. 160-163.

<sup>2</sup> Véase al respecto MARTÍNEZ CUADRADO, Miguel, *Elecciones y partidos políticos de España (1868-1931)*, Madrid, Taurus, 1969; MÁIZ VÁZQUEZ, Bernardo, *Galicia na Segunda República e baixo o franquismo (1930-1976)*, Vigo, Ediciós Xerais de Galicia, 1988; FERNÁNDEZ SANTANDER, Carlos, *El Alzamiento de 1936 en Galicia. Datos para una historia de la guerra civil*, Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, 1983<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Sobre esta cuestión son muy interesantes algunas de las reflexiones contenidas en VALÍN, A., *La sociabilidad en la historia contemporánea: reflexiones teóricas y ejercicios de análisis*, Ourense, Duen de Bux, 2001.

incontaminados», las autoridades hubieron de apoyarse en las estructuras preexistentes controladas por alguno de los bandos políticos enfrentados para hallar un interlocutor válido; en otros casos son los propios cabecillas de éstos los que buscan acomodo en la nueva situación adjudicándose etiquetas en las que diluir su anterior compromiso y ganarse de este modo el favor del poder central.

Mientras, todo aquel capital político acumulado en anteriores experiencias societarias, el refuerzo proporcionado por activos retornados americanos<sup>4</sup> y la nueva estructura de oportunidades abierta con el cambio de régimen se conjugan para proporcionar nuevos bríos al asociacionismo obrero y campesino. Volvamos nuestra mirada a la provincia de Ourense para mejor entender las diferentes estrategias desarrolladas por la pléyade de actores interesados en controlar este proceso, pues sólo así comprenderemos la verdadera naturaleza de la represión implementada por el franquismo. Si aquélla escogiese como referencia cronológica los albores del año 1934 habría de concluir necesariamente la más que aceptable salud del societarismo ourensano y su relativa implicación en los procesos de gestión del voto urbano y campesino. Respecto al primero son, naturalmente, los socialistas los principales beneficiarios gracias a su posición dominante en la mayoría de los sindicatos profesionales afectos a las Casas del Pueblo de la capital y de las principales villas; cenetistas y comunistas no logran contestar su hegemonía, lo que no obsta para que su voz se escuche con diáfana claridad en alguno de los grandes debates abiertos.

En el área rural las cosas discurren por caminos no del todo coincidentes. El sindicalismo católico estaba al borde del colapso, por lo que no parecía en la mejor disposición para proporcionar nutridas clientelas a los candidatos derechistas, fuesen calvosotelistas u hombres de Gil Robles. En cambio, las fuerzas republicanas cuentan con un buen número de sociedades adheridas: contadas la Organización Republicana Gallega (ORGA) y numerosas el Partido Republicano Radical (PRR) de Lerroux. Este último consiguió atraer a sus filas a Basilio Álvarez, el popular abad de Beiro, otrora una continua explosión de incontinencia verbal y ahora instalado en una nada disimulada moderación que enseguida le reportó sus frutos en forma de escaños: 3 de 9 en las constituyentes de 1931 y 4 en las legislativas de noviembre de 1933; algo tendría que ver en estos resultados su antiguo prestigio en el movimiento agrario, pero seguramente aún más el “desembarco” en el partido de antiguos notables que seguían mangoneando el sufragio como en los mejores tiempos de la Monarquía. Los nacionalistas del Partido Galeguista (PG) todavía hacen votos por un agrarismo no comprometido políticamente con la esperanza de convertirse en sus únicos guías, pero el varapalo electoral del otoño del 33 les convence de la utilidad de pugnar por el control de unas sociedades cuya capacidad de atracción de sufragios todos se disputan.

De entre las fuerzas obreras sobresale, en primer lugar, la socialista Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT), con 18 sociedades adheridas<sup>5</sup>. La comarca de Valdeorras, situada en el extremo nororiental de la provincia, constituye su principal centro de acción con hasta 8 sociedades y presencia

---

<sup>4</sup> Sobre el destacado papel de éstos en la movilización sociopolítica de la Galicia del primer tercio del siglo XX véase NÚÑEZ SEIXAS, Xosé Manuel, *Emigrantes, caciques e indianos*, Vigo, Ediciós Xerais de Galicia, 1998.

<sup>5</sup> GONZÁLEZ PROBADOS, Manuel, “A acción agraria socialista na II República”, en D. Pereira (coord.), *Os conquistadores modernos. Movemento obreiro na Galicia de anteguerra*, pp. 173-194, Vigo, A Nosa Terra, 1992, p. 184.

en seis de los 7 ayuntamientos que integraban el partido judicial. Menor actividad desplegaba en los partidos de Allariz, Ourense y Verín, con dos sociedades en cada uno de ellos, y puramente simbólica en los de Xinzo de Limia, Celanova, Ribadavia y Carballiño en los que estaba presente a través de una única agraria. Los sindicatos de carácter anarquista integrados en la Confederación Regional Galaica (CRG) gozaban aún de más reducida implantación: tan sólo 4 sociedades repartidas entre los partidos judiciales de Verín (Portocamba-Castrelo do Val y Albarellos-Monterrei), Carballiño (Brués-Boborás) y Viana do Bolo (A Gudiña)<sup>6</sup>. La comunista Confederación General del Trabajo Unitario (CGTU) contaba por entonces con una única sociedad adherida: la de Oficios Varios y Agricultores de Allariz.

Este panorama nos dibuja un cierto vacío asociativo en amplias zonas del centro y los cuadrantes suroccidental y oeste de la provincia, por lo menos en cuanto a entidades integradas en organizaciones afectas a la izquierda obrera. Mas como señalamos en otro lugar, lo cierto es que tenemos algunos ejemplos de sociedades agrarias controladas por hombres próximos al socialismo que continúan reticentes a integrarse formalmente en federaciones de dimensión estatal pero son utilizadas como plataforma política para consolidar importantes parcelas de poder en el ámbito municipal<sup>7</sup>. De mayor entidad aún son los notables esfuerzos de penetración que numerosos líderes realizan en los meses que preceden a la insurrección de octubre. Bien es cierto que cuando ésta se produce la mayoría de los sindicatos obreros y profesionales de la capital y las principales villas no se muestran dispuestos a ir más allá de un paro de solidaridad con sus compañeros catalanes y asturianos. Y no lo es menos que, por muy penetradas que estuviesen las sociedades agrarias de las “ideas avanzadas”, la gran mayoría se abstuvo de comulgar con unos objetivos inasumibles en función del grado de polarización existente en la sociedad ourensana de aquellos momentos.

No podrá decirse que los dirigentes más activos se abstuviesen de intentarlo. Dejemos que sea el capitán de Infantería Luis de la Puente y López de Heredia quien nos lo narre a partir de su dictamen en la causa incoada contra varios vecinos de los ayuntamientos de Taboadela y Allariz que se distinguieron en los cortes de carreteras y líneas telefónicas y telegráficas:

«[...] no ha sido posible averiguar nada en concreto sobre materia delictiva y únicamente se hace sospechoso el que sean individuos pertenecientes a distintas Sociedades Agrarias, las cuales parece han sido, en general, solicitadas por los elementos revolucionarios en esta provincia para que secunden el movimiento [...] En Paderne, a unos seis kilómetros del corte de carretera mencionado, se registró en los primeros días de la huelga una gran actividad por reclutar y exaltar a las masas de obreros y campesinos. Estas masas de campesinos parece eran manejadas por las sociedades agrarias, que aunque aparentan ser ajenas a filiaciones políticas parece eran simpatizantes con las ideas comunistas y socialistas. [...] Fracasado el movimiento revolucionario todos los complicados en él se esfuerzan en ocultar sus actuaciones y complicidades. Acaso por el número tan considerable de éstos o por el temor que hayan infundido a los testigos, se viene apreciando en este Juzgado que las declaraciones son por lo general tímidas y con poca firmeza y espontaneidad. Puede

<sup>6</sup> PEREIRA, Dionisio, *A CNT na Galicia. 1922-1936*, Santiago de Compostela, Laiovento, 1994.

<sup>7</sup> Véase PRADA RODRÍGUEZ, Julio, “«... y le dijimos que no podía trabajar sin asociarse». Societarismo y conflictividad campesina en el Ourense republicano”, en S. Castillo y R. Fernández (coords.), *Campesinos, artesanos, trabajadores*, Lleida, Milenio, 2001, pp. 237-248.

decirse, sin error, que existe una confabulación general para no comprometer a nadie en los delitos que se persiguen, pues es increíble que la mayoría de los testigos no puedan aportar datos de hechos que son del rumor público, en ocasiones, y cometidos por vecinos próximos a ellos. En esta causa, como en las demás que por análogos delitos se instruyen en este Juzgado, se ha notado esta circunstancia de falta general de valor cívico»<sup>8</sup>

Que las autoridades militares y gubernativas eran muy conscientes del peligro que representaba esta conexión nos los demuestra la represión llevada a cabo en toda la provincia. Con ella no sólo se aprovecha para dinamitar gran parte de la estructura societaria obrera y campesina consolidada, no sin dificultades, durante el primer bienio, sino que el modelo represivo ensayado anticipa algunos aspectos del implementado a partir de julio de 1936: extensión desproporcionada de la jurisdicción de guerra, realización de numerosas detenciones preventivas, utilización de informes procedentes de distintas instancias deladoras -incluidos los párrocos rurales-, tendencia de jueces y fiscales a estimar que determinados hechos forman parte un plan revolucionario de dimensión estatal, intento de numerosos “empresarios políticos” de aprovechar la coyuntura para librarse de la incómoda presencia de un competidor... Y, naturalmente, una más que notable coincidencia en los actores de uno y otro momento: según se recoge en el cuadro anexo, hasta un 32,14% de los represaliados ourensanos en Octubre del 34 lo fueron también a raíz de la sublevación militar, lo que resulta muy significativo a la hora de establecer líneas de continuidad tanto en las modalidades represivas como en los protagonistas activos y pasivos de la represión<sup>9</sup>.

<b>Porcentaje de represaliados octubre 1934/julio 1936</b>		
Encausados (jurisdicción de guerra)	22	25,88%
Asesinados	4	4,71%
Detenidos no encausados	3	3,53%
<b>Total</b>	<b>29</b>	<b>34,12%</b>

Fuente: Elaboración propia a partir de AGMO y Archivo Histórico Provincial de Ourense (AHPOU). Fondo Prisión Provincial, libro registro de reclusos.

La ausencia del Libro-Registro de Asociaciones que debiera obrar entre los fondos del Gobierno Civil nos impide cuantificar exactamente cuántas sociedades obreras y campesinas fueron clausuradas, pero los datos indirectos permiten intuir que su número debió de ser muy elevado. A ello habría que sumar las detenciones y

<sup>8</sup> Archivo General Militar de Ourense (AGMO), causa 242/1934, fols. 79v e 80a.

<sup>9</sup> Esta coincidencia entre los represaliados de VII-1936 y X-1934 también es observada por SUÁREZ MARTÍNEZ, Xosé Manuel, *Alzamiento y represión en la comarca de Ferrol. 1936-1939*, Tesis doctoral dirigida por M<sup>a</sup> Soledad Gómez de las Heras (Dpto. de Historia Contemporánea de la Facultad de Geografía e Historia de la UNED). Cf. asimismo PRADA RODRÍGUEZ, Julio, “«Abaixo o fascismo e viva a revolución social». A revolución de outubro na provincia de Ourense”, *Boletín Auriense*, 30, 2000, pp. 169-200.

órdenes de destierro de numerosos dirigentes y la huida de otros tantos, la destitución de 4 alcaldes, un pedáneo y otros tres ayuntamientos en pleno por complicidad o pasividad ante el movimiento revolucionario. Hasta bien mediado el año 1935 no se levanta la clausura de la mayor parte de las Casas del Pueblo, pero no faltan ejemplos, caso de la Agrupación Agraria Socialista de Armariz (Nogueira de Ramuín), donde la prohibición persistirá hasta el triunfo de las izquierdas en febrero de 1936<sup>10</sup>.

La coyuntura represiva permite a sectores vinculados a la patronal redoblar sus esfuerzos para resucitar el moribundo sindicalismo católico -en febrero de 1935 se crea el Sindicato de Obreros Profesionales de Oficios Varios y un año más tarde el Sindicato Católico de Orense, también declaradamente antimarxista y defensor del alejamiento de la lucha política de los obreros- a la vez que no ocultan su preocupación por el hecho de que las doctrinas marxistas pudiesen penetrar no sólo en los elementos obreros sino también en profesionales y miembros de las clases medias<sup>11</sup>. En esta tarea encontraron también el apoyo decidido de sectores políticos vinculados a Acción Popular Agraria (APA) de Orense y de no pocos curas rurales que contemplaban con una mezcla de pavor y estupor la creciente penetración del socialismo en sus parroquias.

Las cosas no tardarían, nuevamente, en cambiar. Desde finales de la primavera aumentan las actividades clandestinas de líderes izquierdistas sometidos a estrecha vigilancia por parte de las autoridades. Más que las puramente propagandistas resultan de especial interés las orientadas a reconstruir la estructura societaria en el rural ourensano. Así, por ejemplo, a mediados de mayo, el semiclandestino secretariado provincial del PCE convocaba a una reunión a los dirigentes de los diferentes radios locales de la comarca del Ribeiro para discutir la futura estrategia a desarrollar por el partido. Una estrategia que evoluciona de una clara desconfianza hacia el campesinado en las resoluciones de su I Congreso (1922) a la atención prestada al problema agrario en su III Congreso (1929), pasando por la elaboración de un programa específico para Galicia a finales de 1932<sup>12</sup>. Otro tanto hace el PSOE, que intenta recuperar posiciones en las sociedades fieles a la FNTT presionando para dejar sin efecto la orden de cierre gubernativo o forzando un cambio de nombre que facilite su inscripción con idénticas bases. Pero tampoco hay que despreciar la actividad desarrollada por notables locales y diversas iniciativas individuales que actúan al margen de las estrategias decisionales de las cúpulas partidarias instaladas en la capital en un intento de asegurarse un capital político con el que negociar ante futuros repartos del poder<sup>13</sup>.

Estos progresos del asociacionismo obrero y campesino no fueron suficientes para que en las elecciones de febrero de 1936 las formaciones de izquierda tradujesen en escaños sus exiguos sufragios. No lo fueron, siquiera, para impedir la consumación de un gigantesco fraude electoral sólo comparable a los mejores tiempos de la Restauración; lo cual, más que revelar la limitada dimensión del proceso, pone de manifiesto la debilidad estructural del compromiso ideológico

<sup>10</sup> Véanse las manifestaciones del que era su presidente, Nicanor Álvarez Lorenzo, en AHPOU, Fondo Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, caja 7.193, exp. 36/1939.

<sup>11</sup> "A la conquista de los obreros de aquí", *La Región* (2-XII-1934).

<sup>12</sup> Este proceso puede seguirse en SANTIDRIÁN ARIAS, Víctor Manuel, *Historia do PCE en Galicia (1920-1968)*, Sada-A Coruña, Edición do Castro, 2002, pp. 153 y ss.

<sup>13</sup> Véase, por ejemplo, lo ocurrido en el partido judicial de Bande en PRADA RODRÍGUEZ, Julio, "Asociacionismo agrario e mobilización política na Baixa Limia", *Lethes*, 2, 2000, pp. 20-31.

de quienes se prestan a incluir su nombre en los listados de afiliados de estas sociedades. Unas sociedades que, con la primavera, florecen todavía con más rapidez que la campaña ourensana; y, lo que resulta más sorprendente a juzgar por lo ocurrido en febrero, sin recatarse muchas de ellas de guardar una bandera roja en los improvisados locales que le sirven de sede. No es de extrañar que *La Región*, portavoz de los intereses católicos locales, se refiriese con pavor a cómo unas y otras «eran controladas y manejadas para cosas subversivas, en absoluto ajenas a los sagrados intereses de la clase».

### **El golpe militar y la liquidación del tejido asociativo obrero y campesino**

«Durante largo tiempo ha sido España víctima de actuaciones políticas desarrolladas por algunos partidos que, lejos de cooperar, a la prosperidad de la Patria, satisfacían ambiciones personales con detrimento del bien común, pero nunca, como en los momentos anteriores al presente, ha culminado el antipatriotismo en la formación de entidades que, bajo apariencia política, envenenaron al pueblo con el ofrecimiento de supuestas reivindicaciones sociales, espejuelo para que las masas obreras siguieran a sus dirigentes, quienes las aprovecharon para medrar a su costa, lanzarlas a la perpetración de toda clase de desmanes y cristalizar al fin en la formación del funesto llamado Frente Popular [...]»

Este texto forma parte del preámbulo del decreto nº 18 de 13-IX-1936 por el que la Junta de Defensa Nacional declaraba fuera de la ley a todos los partidos y agrupaciones políticas o sociales que, desde la convocatoria de las elecciones de febrero, se habían integrado en el Frente Popular, así como a las demás organizaciones que se habían opuesto al triunfo de los sublevados.

Nadie creará, sin embargo, que en algún lugar de la España sublevada tales entidades continuaron funcionando como si nada ante la ausencia de una norma legal que pusiera fin a su existencia. Algo parecido, sólo que en sentido inverso, ocurre por lo que a la cuestión de la militancia comunista se refiere. Volvamos rápidamente nuestra mirada atrás por unos instantes a fin de arrojar luz sobre tales contradicciones, incluida la del certificado de defunción legal de unas sociedades que llevaban dos meses disueltas; hagámoslo con dirección a una comarca, la de Bande, sobre la que disponemos de abundante documentación, y siempre sin perder de vista los mecanismos de destrucción del tejido asociativo empleados por los sublevados.

Cuando el 20 de julio de 1936 se declara el estado de guerra en la provincia, la primera reacción de parte de los dirigentes políticos y sociales es acudir a la sede de partidos y sindicatos para destruir u ocultar los papeles más comprometedores. Otros, creyendo en una simple y transitoria rectificación, no piensan que la represión pueda alcanzarles y se muestran más confiados; pronto se apercibirán de su error. Los sublevados, en cambio, se aprestan a incautarse de cuanta documentación encuentran en los registros que se suceden por toda la geografía provincial. En primer lugar, el famoso Libro-Registro de Asociaciones del Gobierno Civil, el cual, aunque sólo contenía una parte de las sociedades obreras y campesinas de la provincia, pues un porcentaje substancial no había culminado los trámites legales para la inscripción, va a ser profusamente utilizado en las semanas siguientes para proceder al encarcelamiento de dirigentes y simples asociados<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup> Cf. la documentación incautada a la directiva de la «Sociedad de Agricultores de Jacebanes» (Quintela de Leirado) de la cual se desprende que, a pesar de haberse constituido formalmente el 25-II-

Pero son los listados de afiliados incautados por la Guardia Civil la pieza más deseada: contienen los nombres de docenas de cotizantes a las más diversas sociedades locales, la mayoría de ámbito parroquial, e, incluso, los hay que llevan anexa el acta de constitución de la sociedad. Una vez que comienzan las detenciones, cientos de campesinos y jornaleros empleados en las obras del ferrocarril comprobarán con estupor que se les acusa de figurar como afiliados y cotizantes al comunismo, cuando, aseguran, en sus aldeas jamás se había escuchado tal palabra. Reconocen, eso sí, que estaban encuadrados en el sindicato campesino o de oficios varios de su parroquia porque, según ratifican todos ellos y confirman los propios derechistas locales, era el único medio de encontrar trabajo a jornal en los meses anteriores al golpe; alguno incluso confiesa haber asistido al entierro de varios obreros asesinados en la capital en el mes de junio en representación de la sociedad y haberse sumado a la huelga de protesta convocada en toda la provincia, pero al mismo tiempo sostiene tercamente su no pertenencia al PCE por más golpes que le propinan quienes lo “interrogan convenientemente” y aseguran su militancia con idéntica terquedad.

Y, curiosamente, ambos tenían razón. La mayoría de los historiadores que leyesen hace años las memorias del dirigente comunista Santiago Álvarez considerarían una exageración, producto de la propia naturaleza de la obra, la afirmación de que, con 2.000 militantes, Ourense era, en marzo de 1936, la quinta provincia del Estado en cuanto a afiliación, sólo superada por Madrid, Sevilla, Asturias e Valencia<sup>15</sup>. El ya citado trabajo de V. Santidrián eleva esta cifra a 3.000 militantes 4 meses más tarde, cifra que, dada la estructura socioprofesional y las características productivas de la provincia, se nos antojaría producto de un error tipográfico, de un cero de más en la documentación interna del partido manejada por este estudioso. Ni uno ni otro yerran por exceso y hasta diríamos que pecan ligeramente por defecto si por “militantes” entendemos los afiliados a ciertas sociedades y sindicatos bajo la órbita del PCE.

Veámoslo en esa comarca situada en el extremo suroriental de la provincia, nada proclive históricamente a experiencias societarias y menos aún a mostrarse receptiva a exaltados credos imaginados para realidades socioeconómicas muy diferentes. Entre los días 24 y 26 de julio se cursaron desde la Comandancia Militar de Ourense instrucciones telegráficas y telefónicas ordenando a los responsables de las fuerzas de orden público la clausura de cuantas sedes de sociedades y sindicatos afectos a la política del Frente Popular hubiese en cada demarcación respectiva. En la última de las fechas anotadas, el alférez de Carabineros en función de comandante militar de Entrimo se personó en dicha villa acompañado de varios números y paisanos pertenecientes a las Milicias Nacionales a fin de «proceder al reconocimiento y clausura del local destinado a una sociedad denominada de Oficios Varios, pero con carácter comunista establecida en esta localidad»<sup>16</sup>.

La inspección culminó con la incautación de abundante documentación, entre la que se incluían 39 novelas, 26 ejemplares correspondientes a la Biblioteca de Estudios Anarquistas, varios panfletos de «carácter comunista», 13 cartas, 33 carnets

---

1936 y funcionar plenamente hasta el mes de julio, el Gobierno Civil no tenía siquiera noticia de su existencia (AGMO, causa 709/1938, fols 11 y ss.).

<sup>15</sup> ÁLVAREZ, Santiago, *Memorias I. Recuerdos de infancia y de juventud (1920-1936)*, Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, 1985, p. 165.

<sup>16</sup> AGMO, causa 220/1936, fol. 5a. Las citas que siguen proceden de la mencionada causa dirigida contra el presidente de dicha sociedad Eulogio Álvarez Hortas.

sin cubrir, varios recibos y, sobre todo, dos libros de actas, un libro de contaduría y un listado con los afiliados de la mentada sociedad. Ni tan siquiera 24 horas tardó el máximo responsable militar de la provincia en ordenar examinar detenidamente dichos documentos «por si se hallaba materia delictiva». De tal examen resultó que en algunas de las mencionadas cartas varios socios «inducían a la revolución y al exterminio del capitalismo», de lo cual el comandante militar pasó al juez instructor de causas a fin de que procediese a incoar el oportuno sumario. Mientras parte de la directiva conseguía huir, varios afiliados fueron detenidos y trasladados a prisión, donde, con motivo de otras diligencias paralelas, se le interrogó sobre su militancia comunista y sobre la tan proyectada revolución, reaccionando todos con esa mezcla de sorpresa y estupor a que aludíamos párrafos atrás. Las pruebas eran, sin embargo, concluyentes: bastaba esgrimir la hoz y el martillo con que se adornaban varios de los panfletos descritos y hasta en la gavilla, el racimo y los útiles de labranza que constituían el sello de los carnets incautados era posible descubrir peligrosas connotaciones revolucionarias. Mas aquéllos insistían en su inocencia, asegurando que sólo se afiliaron para poder trabajar a jornal e, incluso, poder abandonar la provincia con destino a las siegas en Castilla como llevaban haciendo décadas.

En su ayuda acudió el propio instructor, que incorporó al sumario un revelador documento en forma de carta dirigida al responsable de la Sociedad en la cual le comunicaban que

«nos presentamos los socios de Lantemil al sr. Manuel parada propietario de la fabrica de la reloeira pidiendole trabajo para los socios que pudiera emplear donde nos dio palabra deso y nos encontramos tambien con uno que esta trabajando no siendo socio y le dijimos que no podia trabajar sin asociarse y nos contesto que fuéramos rezar y nosotros le contestamos que ya lo beriamos eso los socios de Lantemil estamos todos de acuerdo en que no se armita en la sociedad ese indibiduo sin contar con nosotros que es Benito Miguez de Reloeira y alguno mas que se presente del mismo pueblo y de no hacerlo así nos daremos todos los socios de Lantemil de baja en ese sociedad [sic] »

La misiva, datada en la primavera anterior, confirmaba las presiones a que eran sometidos los elementos no sindicados por los dirigentes societarios y, en cierta medida, exculpaba a los simples socios; al menos los dejaba a salvo de las penas más severas -así lo entendió el auditor de guerra decretando con posterioridad el sobreseimiento provisional de las actuaciones y el pase a disposición gubernativa de los inculcados-, pero no aclaraba ni la procedencia de aquella documentación ni el origen de la adscripción comunista de la Sociedad.

Casi al mismo tiempo que tan exaltados socios redactaban dicho texto, el día 5 de abril, la cúpula provincial del PCE consideró que existían ya las circunstancias objetivas necesarias para dar el gran salto hacia el control del asociacionismo campesino. Esa tarde, en el primer piso del nº 1 de la ourensana Plaza del Cid, 82 delegados en representación de 52 grupos campesinos se reunieron al objeto de constituir la Federación Provincial de Campesinos de Orense<sup>17</sup>. La directiva elegida certificaba el control comunista de la Federación, pero la inclusión de al menos dos no afiliados parece que deba interpretarse en el sentido de un guiño

---

<sup>17</sup> Las cifras de asistentes en VALCÁRCEL LÓPEZ, Márcos, *Ourense, 1931-1936: Estructura económica e comportamentos políticos*, Tesis doctoral inédita, Universidad de Santiago de Compostela, 1992, p. 496.

hacia aquellas sociedades cuyos dirigentes continuaban mostrándose reticentes a encuadrarse en un organismo que adoptase como enseña la bandera roja de los soviets.

En la reunión no debieron estar presentes nuestros conocidos de la Sociedad de Oficios Varios de Entrimo, pero sus dirigentes no tardaron en sentirse atraídos por una experiencia que en pocas semanas duplicó y hasta triplicó el número de adheridos<sup>18</sup>. Posiblemente a principios del mes de mayo se pusieron en contacto con la dirección provincial de la Federación solicitando información; su secretario general, ausente el máximo responsable, que lo era también del PCE provincial, con motivo de su designación como compromisario para la elección de presidente de la República, les informaba a vuelta de correo de los progresos realizados a la vez que remitía un ejemplar del reglamento-programa de la Federación invitándoles a transmitir “todos aquellos problemas que signifiquen preocupación actualmente en vuestra organización”<sup>19</sup>. Ni que decir tiene que los dirigentes de Entrimo decidieron formalizar su ingreso en la Federación siendo contabilizados en adelante sus asociados como militantes y aún cotizantes del Partido.

Es posible que para ello ni siquiera consultasen a los afiliados, como tampoco lo hicieron los responsables de otra de estas sociedades en el vecino ayuntamiento de Lobios. Según el testimonio de B.F.A., militante de las Mocidades Galeguistas de esta localidad, la aparición de varios sindicatos adheridos a la Federación en dicho concejo

« [...] foi unha xogada que fixeron os comunistas, moi fea [...]. Había un fulano que lle chamaban ‘O Barbas’ que facía desas sociedades e prometía mil cousas e tal, e despois esa sociedade figuraba aquí no sindicato [...] que a controlaban os comunistas e entónces... alí ninguén era comunista realmente ¿non?, pero figuraba [...] adherido ou algo así a unha cousa que controlaban os comunistas»<sup>20</sup>

Otros muchos ayuntamientos tuvieron su particular “Barbas”; hombres que por las más diversas razones gozaban de cierto predicamento entre sus vecinos y que no dudaron en entregar a la instancia provincial controlada por el PCE unas organizaciones empleadas como cabeza de puente para conseguir una creciente imbricación entre las luchas obreras de la capital y las principales villas y un mundo rural que hasta entonces se había resistido a trascender los estrechos límites de cada parroquia. En algunas comarcas, caso de Valdeorras, la fuerza de estos sindicatos llegó a condicionar la vida política de las corporaciones designadas en el mes de marzo por orden gubernativa. Destacados socialistas e incluso algún comunista consiguen hacerse con varias alcaldías gracias a la presión ejercida por unas sociedades que contaban sus afiliados por docenas y al momentáneo respaldo de unos republicanos que, a diferencia de los anteriores, carecen de base popular pero cuentan

<sup>18</sup> Lo que demuestra el fuerte grado de implantación obtenido por el PCE en la provincia, permitiendo anticipar a la etapa previa al golpe, con las lógicas matizaciones de espacio y tiempo, las impresiones de A. Mateos sobre la importancia que, para el crecimiento de los comunistas a costa de los ugetistas, tuvo la sindicación masiva y de aluvión en las zonas que permanecieron fieles a la República una vez consumado aquél. Véase MATEOS, Abdón, *La contrarrevolución franquista. Una aproximación microhistórica a la represión contra UGT y al nacionalsindicalismo desde la Cantabria rural, 1937-1953*, Madrid, Asociación de Historiadores del Presente, 2003, p. 23.

<sup>19</sup> AGMO, causa 220/1936, fol. 11.

<sup>20</sup> Entrevista con B.F.A., vecino de Grou-Lobios, realizada por Ramón Estévez (Facultad de Historia-Universidad de Santiago, Fondo Historga, nº 5, p. 8).

con el apoyo del Gobierno Civil.

Enseguida, empero, la unidad de acción se va a romper. Especialmente cuando los comités locales del Frente Popular, una vez despojados de su función electoral, pasen a ser controlados por estos líderes societarios y sean empleados para canalizar las demandas de los jornaleros transformándose, allí donde realmente funcionan, en un destacado elemento de presión. Conocidos republicanos e izquierdistas no tardan en anunciar con su retirada una ruptura que no hubiera tardado en escenificarse de no haberse producido el levantamiento militar: el alcalde de O Barco y fundador del comité de IR, Eulogio Gavela, dimitirá poco después de su nombramiento «por parecerle excesivas las peticiones y pretensiones de los elementos más extremistas de la Comarca»<sup>21</sup>; también Joaquín Rodríguez Álvarez, concejal ya en el primer bienio, fundador del comité socialista local y activo propagandista durante el último período electoral ha de renunciar a su cargo «por discrepancias con los elementos extremistas, como así mismo fué [sic] expulsado del partido socialista por suponerle en comitancia [sic] con los elementos derechistas»<sup>22</sup>. El presidente del comité local de IR de Viloira, José Rodríguez, es desplazado por socialistas y comunistas, y en Carballada de Valdeorras el alcalde y presidente de la agrupación local de IR, Adolfo Anta, hizo aprobar, el 7 de junio, una resolución de su partido en la que se condenaba y advertía al comité provincial del partido liderado por Azaña de «[...] la coacción que ejercen los obreros sobre los partidos republicanos, pues de seguir de esta forma, este Comité, se verá en la obligación de separarse del Bloque Popular, ya que no puede participar con Socialistas y Comunistas, toda vez que su política va en contra del Partido de Izquierda»<sup>23</sup>. Y así numerosos ejemplos.

Retornados al mes de julio de 1936, nuestro apresurado *flash-back* nos ha permitido dar respuesta satisfactoria a las verdaderas claves del proceso asociativo y la elevada militancia comunista existente en la provincia en vísperas de la sublevación. Y también ofrece una explicación, cuando menos parcial, a una cuestión que estaba implícita cuando nos preguntábamos por la naturaleza real de ambos elementos: ¿dónde se hallaban esas entusiastas masas militantes, comprometidas y fuertemente ideologizadas, cuando los militares salieron a la calle?

Es verdad que en muchos lugares de la provincia fueron cientos los que se manifestaron los días 18, 19 y 20 en defensa de la legalidad republicana; pero no lo es menos que, salvo en tres o cuatro casos concretos, fue suficiente con que varios números de la Guardia Civil, en ocasiones acompañados de media docena de milicianos derechistas, hiciesen acto de presencia anunciando la declaración del estado de guerra para que se disolviesen sin oponer la más mínima resistencia. Cierto que faltaron armas y faltó dirección; que los gobernadores civiles se vieron paralizados por las dudas del gobierno de Casares y que los militares y la Guardia Civil engañaron al pueblo faltando a su juramento de fidelidad a la República, pero también en la naturaleza real del compromiso ha de buscarse parte de la explicación.

Así lo entendieron los propios sublevados, que en los procesos incoados se encargaron de discernir cuidadosamente entre dirigentes y dirigidos; entre propagandistas activos y meros receptores pasivos de «ideologías destructoras»;

<sup>21</sup> AHPOU, Fondo TRRP, caja 7.209, expediente 103/1937, fol. s/nº.

<sup>22</sup> AHPOU, Fondo TRRP, caja 7.209, expediente 99/1937, fol. s/nº.

<sup>23</sup> Acta de la penúltima reunión de la Agrupación Municipal de Izquierda Republicana procedente del libro de sesiones depositado a raíz de la sublevación militar en el puesto de la Guardia Civil de O Barco de Valdeorras.

entre responsables del «envenenamiento de las masas labriegas» y simples engañados por la nueva fe que vino de Rusia. Para los primeros se reservó, inicialmente, el vil asesinato sin proceso alguno en las cunetas de las carreteras o en las aguas del Miño, y más tarde la farsa de un juicio que concluía con la ejecución ante las tapias del Campo de Aragón, lindando con el cementerio de la capital, pues no era cosa de derrochar esfuerzos en traslados de cuerpos inermes. Para los segundos, las penas de cárcel, que en demasiadas ocasiones supusieron el mismo fin que para aquéllos producto del hambre, las torturas o la enfermedad, pero cuando menos dejaban abierta una puerta a la esperanza.

### **Ejecutados y encarcelados: la represión contra los líderes societarios ourensanos**

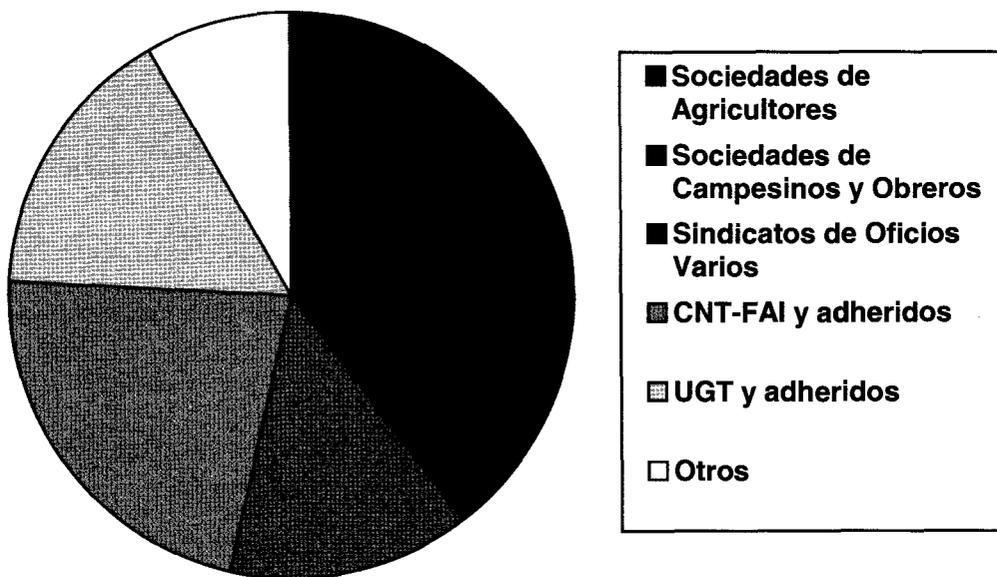
La represión franquista en la provincia de Ourense fue, sin duda, desproporcionada en cuanto a la resistencia encontrada por la sublevación, pero nada sorprendente conociendo las intenciones finales y los objetivos de los alzados<sup>24</sup>. La jurisdicción de guerra dirigió actuaciones, sólo entre 1936 y 1939, contra un total de 2.214 personas; de ellas contrastamos la filiación societaria de 811, lo que confirma la clara voluntad de liquidar el tejido asociativo que se fuera configurando tras los acontecimientos revolucionarios de Octubre. En unos casos pudimos determinar con certeza la central sindical a que estaban adheridas las diferentes sociedades, pero en la mayoría de los supuestos se trata de entidades de carácter parroquial en las que los socios poseían sensibilidades muy diferentes que convivían con más o menos dificultades, siendo también frecuente una lucha soterrada por su control entre activos propagandistas de los sindicatos mayoritarios que trataban de inclinar la balanza en su favor. Sólo en el caso de que conozcamos la filiación concreta del socio figurará como perteneciente a CNT o a UGT-FNNT, pues aunque la Sociedad o Sindicato en cuestión se hallase nominalmente adherido a una u otra hemos constatado que en la mayoría se permitía que unos socios figurasen como adscritos a la entidad rival; por lo anteriormente expresado, nunca aparece la filiación comunista de un socio deducida de su pertenencia a una sociedad integrada en la Federación auspiciada por el PCE, aunque ésta pueda extraerse en numerosos casos de la etiqueta de Sindicatos y Sociedades de Agricultores, Sociedades y Sindicatos de Campesinos y Obreros y Sindicatos de Oficios Varios, que es la terminología original respetada cuando no podemos tener constancia de la filiación concreta de un

<sup>24</sup> No es, con todo, pacífica la historiografía respecto a la planificación previa del uso del terror por parte de los sublevados; entre los muchos que aluden a las famosas *Instrucciones* de Mola como soporte de esta tesis pueden citarse a COBO ROMERO, Francisco, *La guerra civil y la represión franquista en la provincia de Jaén (1936-1950)*, Jaén, Diputación Provincial-Instituto de Estudios Giennenses, 1993, pp. 211-212; CASANOVA, Julián, “Rebelión y revolución”, en S. Juliá (coord.), *Victimas de la guerra civil*, Madrid, Temas de Hoy, 1999, p. 59; ELORZA, Antonio, “Sobre la naturaleza del franquismo”, en *El franquismo: el régimen y la oposición. Actas de las IV Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos*, Guadalajara, ANABAD, 2000, vol. I, p. 816; LAMELA GARCÍA, Luis, *A Coruña, 1936. Memoria convulsa d' unha represión*, Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, 2002, p. 93 y *Crónica de una represión en la 'Costa de la Muerte'. Cee, Vimianzo, Ponte do Porto, Corcubián, Fisterra, Zas...*, Sada-A Coruña, Ediciós do Castro, 1995, p. 15; CENARRO LAGUNAS, Ángela, *El fin de la esperanza: Fascismo y Guerra Civil en la provincia de Teruel (1936-1939)*, Teruel, Instituto de Estudios Turoleses, 1996, p. 69 y “Muerte y subordinación en la España franquista: el imperio de la violencia como base del ‘Nuevo Estado’”, *Historia Social*, 30, 1998, p. 13; ESPINOSA MAESTRE, Francisco, *La columna de la muerte. El avance del ejército franquista de Sevilla a Badajoz*, Barcelona, Crítica, 2003, pp. 251, 256 e 261.

socio. El resultado es el cuadro adjunto, que muestra un claro predominio de estos últimos mientras la pugna entre ugetistas y anarcosindicalistas se resuelve, por algo menos de 4 puntos porcentuales sobre el conjunto de los 811 afiliados conocidos, en favor de los primeros:

<b>La jurisdicción de guerra en Ourense (julio 1936-diciembre 1939)</b>				
CNT-FAI y Sindicatos adheridos	56	2,53%	4,28%	6,91%
UGT y Sindicatos adheridos	86	3,88%	6,57%	10,60%
Sindicatos y Sociedades de Agricultores	456	20,60%	34,84%	56,23%
Sociedades y Sindicatos de Campesinos y Obreros	98	4,43%	7,49%	12,08%
Sindicatos de Oficios Varios	88	3,97%	6,72%	10,85%
ATEO	12	0,54%	0,92%	1,48%
Casa del Pueblo	15	0,68%	1,15%	1,85%

Fuente: Elaboración propia a partir de AGMO



*Fuente:* Elaboración propia a partir de AGMO.

La relación entre filiación social y ejecuciones permite matizar todavía más estos datos. Sobre un total 108 ejecutados de los que nos consta su filiación social, cenetistas y ugetistas -que representaban un exiguo 6,91% y un 10,60%, respectivamente, del total de encartados por la jurisdicción de guerra de filiación conocida- incrementan su participación respectiva hasta el 22,22% y el 15,74%. En cambio, las Sociudades de Agricultores, algunas ciertamente penetradas por el PCE pero la mayoría todavía al servicio de la política caciquil de bandos o completamente inocuas desde el punto de vista político, reducen su participación del 56,23% a sólo el 11,11%; Sindicatos de Oficios Varios y Sociudades y Sindicatos de Campesinos y Obreros registran también un notable incremento a costa del descenso de las anteriores. Añadamos a esto que más de la mitad de esos ejecutados formaban o habían formado parte de la directiva de sus respectivas Sociudades -a pesar de que, proporcionalmente, fueron muchos más los dirigentes que consiguieron huir al verse más expuestos a la exigencia de responsabilidades desde el primer momento- mientras el resto de afiliados estaban conceptuados, salvo contadas excepciones, como activos propagandistas en los informes de la Guardia Civil y/o de Falange. Consideremos, por último, que fueron precisamente dirigentes y afiliados de las sociedades más activas y radicales en la etapa del Frente Popular quienes más padecieron los efectos de la represión física.

Por poner sólo un ejemplo de dos parroquias pertenecientes al ayuntamiento de Vilamartín de Valdeorras, único punto en el que los sublevados

cosecharon una víctima producto de la resistencia campesina al golpe militar: San Pedro de Correxais, que en 1930 contaba con 370 habitantes, perdió un mínimo de 6 vecinos entre directivos y afiliados al Sindicato Campesino local, controlado por comunistas y socialistas, cifra que se multiplicaría por dos de hacer caso a los testimonios orales no contrastados con fuentes documentales escritas; la vecina parroquia de Santa Comba de Córcomo, con 399 habitantes, registró al menos otras 5 víctimas. Todos ellos eran campesinos pequeño-propietarios, y no pocos debían recurrir periódicamente al trabajo a jornal para completar unos ingresos que les permitiesen garantizar su reproducción familiar. Todos conocidos por su participación no sólo en el desesperado acto de resistencia que intentaba frenar el avance de la columna militar que se dirigía hacia la cabecera del partido judicial, sino por una activa militancia societaria que les había granjeado la enemistad de ciertos notables locales. Todos, en fin, víctimas también de esas extensas redes multifamiliares y de lealtades personales que lo mismo sirvieron para liquidar viejas cuentas pendientes que para establecer mecanismos de colaboración con el nuevo régimen en la línea de lo estudiado por C. Mir<sup>25</sup>.

Nada, por tanto, que permita hablar genéricamente de una represión arbitraria o indiscriminada. De lo primero no tenía más que la existencia de un cierto grado de indeterminación en el que cabía el asesinato de contadas personas carentes de significación política y social y, naturalmente, que era ejercida por el poder sin sujeción a ningún tipo de responsabilidad; de indiscriminada, que alcanzó a prácticamente todos los estratos de la población. Pero tales matices no pueden hacernos perder de vista lo esencial. Y lo esencial es, en primer lugar, que los dirigentes sindicales más activos y radicales de la provincia fueron asesinados con o sin formalidades legales o encarcelados largos años; los que no lo fueron fue gracias a que consiguieron huir, esconderse o poseían una red de relaciones personales y familiares que les permitió salvar la vida. En segundo lugar, que si bien alcanzó a todos los estratos sociales no lo hizo ni con la misma intensidad ni con la misma amplitud, por lo que fue fundamentalmente selectiva. Selectiva porque, si de dirigentes sindicales y políticos hablamos, podemos citar los 44 presidentes encartados por la jurisdicción de guerra, de los cuales 12 fueron asesinados; 5 vicepresidentes, uno de ellos asesinado, 57 secretarios (9 asesinados), 4 vicesecretarios (2 ejecutados), 26 tesoreros, contadores y depositarios de fondos (6 ejecutados); y así hasta otros 74 dirigentes y directivos (de ellos otros 22 asesinados) que constituían la élite social y política del Ourense de posguerra.

No cabe duda, pues, que la represión franquista estuvo orientada hacia el exterminio de las organizaciones políticas y sindicales que habían defendido un modelo político y económico avanzadamente reformista, comprometido a un tiempo en la mejora de las condiciones de vida de las clases trabajadoras<sup>26</sup>. Pero, al mismo tiempo, pensamos que es mucho más correcto hablar en Galicia de una “represión de estatus” que de una “represión de clase”, en el sentido de que fue prioritariamente dirigida contra aquellos sectores que ostentaban poder, reconocimiento e influencia social y se habían identificado con posiciones republicanas, izquierdistas o anti-

<sup>25</sup> MIR CUCÓ, Conxita, *Vivir es sobrevivir. Justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra*, Lleida, Milenio, 2000, pp. 251 y ss.

<sup>26</sup> COBO ROMERO, Francisco y Teresa María ORTEGA LÓPEZ, “Ser jornalero y pobre..., y morir en la posguerra. El carácter selectivo de la represión franquista a través de una visión de largo recorrido, Jaén 1900-1950”, en C. Mir *et alii* (coords.), *Actas del Segon Congrés Recerques. Enfrontaments civils: postguerres i reconstruccions*, Lleida, Associació Recerques i Pagés, 2002, p. 735.

clericales. Procediesen poder e influencia del ejercicio de una determinada profesión socialmente valorada, de su posición en el seno de la Administración local, de su riqueza personal, de su influencia cultural sobre las masas o, como en el caso que nos ocupa, de su capacidad para intervenir en el mercado y en las relaciones sociolaborales. Sin olvidar, naturalmente, a un porcentaje nada despreciable de simples afiliados a sindicatos obreros y campesinos que participaran activamente en los principales conflictos sociales vividos por Ourense en la etapa del Frente Popular y en la resistencia a la sublevación.

Esta “represión de estatus” es la que menor se concilia con los objetivos perseguidos por los sublevados y por sus apoyos locales en la provincia, ya que se dirige contra aquellos que, por esa capacidad de influencia sobre las gentes, suponían un más serio peligro para la consolidación del régimen en su proceso de institucionalización y para esa mezcla de nuevas y viejas élites que acceden o preparan el camino para el control del poder municipal y provincial<sup>27</sup>. Bastaría con recordar aquí las docenas de veces en que fiscales y miembros de los tribunales acudieron como fundamento de su exigencia de responsabilidad al prestigio que tal o cual individuo tenía entre las masas, razón por la que su actuación estaba revestida de una especial perversidad frente, se decía, a los que actuaban arrastrados por su significación; o cuántas veces comprobamos que aquéllos que los acusaban eran los mismos que habían visto su particular estatus amenazado por la irrupción en la escena local de esos nuevos apóstoles de la movilización con los que incluso no era infrecuente que compartiesen clase y extracción social<sup>28</sup>.

Nada que nos sorprenda excesivamente si tenemos en cuenta que a nivel local -cosa diferente, y no siempre, eran la capital provincial y las grandes villas- los bandos políticos conformaran dos bloques, las izquierdas y las derechas, que, a pesar de que resulte difícil de entender con los parámetros actuales, no implicaban la existencia de una fractura provocada por una cosmovisión radicalmente diferente del orden social vigente. Excepto, naturalmente, para aquellos iluminados que habían

<sup>27</sup> Sobre las élites locales franquistas puede verse, entre otros, SALOMÓN CHÉLIZ, M<sup>a</sup> Pilar, “La defensa del orden social: fascismo y religión en Huesca”, en J. Casanova (*et alii*), *El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)*, Zaragoza, Mira, 1999, p. 137 y ss; CIFUENTES CHUECA, Julita, “El ocaso de la República y los orígenes del nuevo orden en la provincia de Zaragoza”, en J. Casanova (*et alii*), *El pasado oculto... op. cit.*, pp. 115 y ss.; CENARRO LAGUNAS, Ángela, *El fin de la esperanza: Fascismo y Guerra Civil en la provincia de Teruel (1936-1939)*, Teruel, Instituto de Estudios Turolenses, 1996, pp. 106 y ss.; SUÁREZ, Xosé Manuel, *Guerra civil e represión en Ferrol e comarca*, s.l., Concello de Ferrol, 2002, p. 79; BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación, “Las instituciones en la implantación del Nuevo Estado: el Ayuntamiento de Málaga en 1937”, *Revista Baetica*, 11, 1988, pp. 513-522; EIROA SAN FRANCISCO, Matilde, “La irradiación de la política en el Nuevo Estado. Instituciones y centros de poder”, en *I Encuentro de investigadores del franquismo*, Barcelona, 1992, pp. 77-80; GRANDÍO SEOANE, Emilio, “El primer personal político del franquismo en la provincia de La Coruña. Cambio y continuidad de la élites políticas municipales durante la guerra civil en la retaguardia nacional (1936-1939)”, en J. Tusell, S. Sueiro, J.M. Marín y M. Casanova (eds.), *El régimen de Franco (1936-1975). Política y relaciones exteriores*, Madrid, UNED, 1993, vol. I, pp. 69-87.

<sup>28</sup> J. Casanova señaló con acierto que la complejidad de nuestra guerra no puede reducirse a una simple cuestión de lucha de clases, aunque el apoyo que determinadas clases o grupos sociales prestaron a cada bando la convirtieron en una contienda que enfrentaba a dos concepciones diferentes del orden social, aspecto este que los observatorios locales permiten rastrear con gran precisión. Cf. CASANOVA, Julián, “Guerra civil, ¿lucha de clases?: El difícil ejercicio de reconstruir el pasado”, *Historia Social*, 20, 1994, p. 148.

osado pasar por alto los principios que regían las pautas de comportamiento de los bandos tradicionales organizando manifestaciones, convocando huelgas, coaccionando a contratistas, patronos y propietarios, negando en nombre de la razón o de la higiene la existencia de Dios, defendiendo el amor libre o, lo que todavía era más grave, intentando disputar con desigual éxito las clientelas de los señores ofertando a través del sindicato un trabajo a jornal o, simplemente, substituyendo la prédica en Jesucristo por esa moderna fe que prometía la emancipación universal de proletarios y campesinos sólo con seguir al pie de la letra las enseñanzas de Marx, Lenin y Largo Caballero. Ciertamente esos fueron los primeros en caer, en no pocos casos porque eran la viva expresión de la apertura a las nuevas realidades provincial y estatal que ese mundo rural estaba experimentando en medio de un universo de cambios acelerados al que no era posible substraerse, por más que las relaciones fuesen aún discontinuas y oscilantes como corresponde a dos universos tangentes.

## Epílogo

L. Fernández Prieto demostró que más del 70% de las sociedades coruñesas fueron disueltas por su relación o la de sus dirigentes con partidos integrados en el Frente Popular; la mayoría de las que siguieron funcionando eran Sociedades Ganaderas de Seguros Mutuos de carácter predominantemente técnico frente a aquellas sociedades agrarias comprometidas con la política local y estatal<sup>29</sup>. Privados de la fuente empleada por el autor, el Registro de Asociaciones del Gobierno Civil, no podemos ofrecer para Ourense una cuantificación exacta de las sociedades que, fuertemente intervenidas<sup>30</sup>, consiguen sobrevivir a la represión franquista y languidecer lentamente hasta que sus elementos dirigentes se integran en el diseño corporativo agrario creado por el régimen, las Hermandades de Labradores y Ganaderos, las Uniones Cooperativas y las Cámaras Oficiales Sindicales. Los datos indiciarios apuntan a que ese porcentaje fue, incluso, superior; y eso descontando aquellas sociedades que se crearon durante la “primavera trágica” y todavía no alcanzaran reconocimiento legal cuando se produjo el golpe de Estado. Faltas de sus dirigentes como consecuencia de la represión o el exilio, con sus socios más activos en prisión, clausurados sus locales y demonizada la “vieja política”, no podía esperarse otra cosa que su desaparición.

Cualesquiera que fuesen las cifras exactas, la desarticulación del tejido social que se opera como consecuencia de la represión del societarismo obrero y campesino trasciende el mero cómputo de asesinados, encarcelados o entidades disueltas formal o informalmente. Aquellas organizaciones que tan decisivo papel tuvieron como agentes movilizadores en un mundo rural todavía preso de la tradicional política de bandos dieron paso a la negación, incluso psicológica, de cuanto significase compromiso público con cualquier causa; al rechazo de toda forma de acción colectiva por miedo a la delación; a la percepción de que sólo era posible hallar refugio en un individualismo exacerbado a la espera de que mudasen los tiempos. Los comportamientos externos de las gentes se modificaron y la desconfianza pasó a presidir las relaciones entre vecinos y familiares. Con ello se transformó también el concepto de la política, que pasó de ser un instrumento de

<sup>29</sup> FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo, “Represión franquista y desarticulación social en Galicia. La destrucción de la organización societaria campesina. 1936-1942”, *Historia Social*, 15, 1993, pp. 49-65.

<sup>30</sup> Cf. las similitudes con el caso cántabro en MATEOS, Abdón, *La contrarrevolución franquista...*, op. cit., p. 27.

modernización de la sociedad a considerarse algo negativo; una especie de pecado congénito de buena parte de la población que era preciso pagar con el sufrimiento para redimirse<sup>31</sup>. Y, finalmente, se acentuaron las tendencias inhibitoras y se generaron tendencias antisociativas que arraigaron profundamente en las generaciones posteriores a la guerra en toda Galicia<sup>32</sup>, lo cual, sin duda, hay que poner en relación con esa tupida red entrelazada de muerte, cárcel, sanciones económicas, requisas, inhabilitaciones, destierros interiores, controles policiales y judiciales y desconfianza permanente creada por el régimen de que hablara G. Sánchez Recio<sup>33</sup>.

Desde este punto de vista, esta modalidad represiva tuvo unos efectos mucho más perversos y duraderos que la represión física. Porque con ella no se buscaba sólo la anulación de determinados individuos, sino la destrucción de los elementos esenciales de la sociedad civil preexistente y su substitución por un nuevo orden social impuesto en el que la población aceptase su sometimiento incondicional al poder político, actuando incluso sobre el plano simbólico. De este modo coadyuvó a la supresión de aquellas formas de conducta consideradas socialmente indeseables mediante complejos mecanismos que iban desde la utilización del terror generado por la represión física hasta fórmulas de atracción que le proporcionasen una mayor legitimidad. Dinamitado ese mismo tejido asociativo que sirviera para que amplias capas sociales comenzasen a cuestionar el tradicional monopolio del poder que detentaban los grupos privilegiados, pudo el régimen recurrir paulatinamente a otros mecanismos de búsqueda del consenso que acabasen por hacer innecesario el permanente recurso a la represión en que asentara su triunfo.

De ellos no fueron los menos importantes los nuevos organismos de encuadramiento obrero y campesino articulados alrededor del partido único; un partido que si bien podía presumir, poco después de finalizada la guerra, de un número de acólitos quizá similar al de las Sociedades existentes en vísperas de la sublevación, no podía ocultar la verdadera naturaleza de los mecanismos de atracción empleados. La búsqueda de la supervivencia fue, como siempre, el eje central del acomodo de aquéllos en el nuevo orden; un orden que, convenientemente adaptado a los nuevos tiempos y realidades, recordaba no poco a aquel orden agrario tradicional donde sotanas, tricornios y notables locales -ahora, frecuentemente, adornados con el uniforme de FET y de las JONS- seguían campando a sus anchas, menos preocupados por la movilización y el encuadramiento de masas propio del fascismo, que por el descuaje de cuanto amenazase su antaño cuestionada hegemonía.

---

<sup>31</sup> GRANDÍO SEOANE, Emilio, *Vixiancia e represión na Galicia da Guerra Civil. O 'Informe Brandariz' (A Coruña, 1937)*, Sada-A Coruña, Edición do Castro, 2001, p. 64.

<sup>32</sup> Véase, por ejemplo, HERVÉS SAYAR, Enrique (*et alii*), "Resistencia y organización. La conflictividad rural en Galicia desde la crisis del Antiguo Régimen al franquismo", *Noticario de Historia Agraria*, 13, 1997, p. 186.

<sup>33</sup> SÁNCHEZ RECIO, Glicerio, "Líneas de investigación y debate historiográfico", en G. Sánchez Recio (ed.), *El primer franquismo (1936-1959)*, Ayer, 33, 199, p. 27.